

CIEN MIL EMPLEOS PERDIDOS EN LIMA

Por: Pedro Francke

(Publicado en Hildebrandt en sus Trece el 19 de mayo de 2017)

Mientras el país discute sobre los líos de la familia Fujimori en torno a la libertad del reo Alberto, paremos olvidar que nuestra economía atraviesa serios problemas. Como se veía venir, el crecimiento este año será muy pero muy bajo, afectando la creación de empleos y la posibilidad de que los microempresarios encuentren un mercado en ampliación para prosperar. Las medidas urgentes que desde la izquierda propusimos la campaña del año pasado no han sido consideradas, mientras el co-gobierno económico del pepecausismo y el fujimorismo nos llevan por mal camino.

El empleo en Lima Metropolitana, según la “Encuesta Permanente” del INEI, ha caído en 74 mil trabajadores en el último año en las empresas grandes (de más de 50 trabajadores) y en otros 33 mil trabajadores en las empresas medianas (de 11 a 50 trabajadores). Suman 107 mil puestos de trabajo menos entre marzo 2016 y marzo 2017. El desempleo juvenil ha amentado de 15 a 19 por ciento. Por si acaso, esto no se debe principalmente a los desastres que golpearon el norte en el primer trimestre del año: estoy presentando cifras de Lima, pero el empleo también ha caído 7 por ciento en Cusco, 12 por ciento en Iquitos y 4 por ciento en Moquegua, por mencionar tres regiones que no han sido afectadas por “El Niño Costero”. La razón es que la economía urbana ya no crece y con ello ha dejado de generar empleos hace ya un par de años; habiendo pasado nueve meses de nuevo gobierno, la macroeconomía peruana no da muestra alguna de recuperación.

Por cierto, si uno lee una nota de prensa del INEI ve cifras contrarias: dice que “se crearon 24 mil puestos de trabajo” el último trimestre. Grave error que realmente se parece mucho a una mentira. A la base hay una muy mala conceptualización de lo sucedido: como no hay empleos, los peruanos se ven obligados a inventarse su propia forma de subsistencia; y el INEI comete la tremenda equivocación, o desatino, de considerar que los jóvenes que limpian vidrios en el semáforo para ganarse unos cobres o las señoras migrantes que intentan sin mucho éxito vender unas pocas frutas en un lugarcito de la calle, tienen “puestos de trabajo”. Si así fuera, a seguir por las estadísticas del INEI, jamás habría en el Perú problemas de trabajo ni crisis de empleo, porque la subsistencia obliga a encontrar alguna fuente de sustento. El INEI está mal. Lo que importa son los empleos que realmente pueden considerarse como tales, puestos de trabajo que pagan un salario en una empresa efectivamente constituida, y eso que ni siquiera estamos exigiendo que sean formales, paguen sus contribuciones a la seguridad social o tengan un contrato de trabajo como manda la ley. No, que al menos sean empleos en los que a fin de semana o mes haya un pago esperado, a diferencia de desesperadas medidas de subsistencia. Esos empleos son los que se crean en empresas de más de 10 trabajadores, y son esos de los que hoy hay en Lima cien mil menos que hace un año. Cien mil menos. Un desastre social.

El INEI se ve obligado a reconocer esto señalando que “el empleo adecuado disminuyó 3,1% (98 mil 100 personas) y acumuló dos meses de comportamiento

negativo al registrar una menor demanda del empleo adecuado en todos los sectores; así, disminuyó en Construcción (-15,6%), (-6,6%), Comercio (-2,1%) y Servicios (-0,6%)". Si a alguien le llama la atención el contraste entre estas cifras y las notas periodísticas que estos días hablan de la reducción de la pobreza, Baste decir que escribo acá sobre este año 2017 y las noticias de la pobreza son del año pasado.

EL PBI SE DETIENE

El pasado lunes el INEI presentó la estimación oficial del PBI mensual, en este caso correspondiente a marzo. Hay que advertir que esto es algo inusual; como ha reiterado varias veces Farid Matuk, ex - jefe de la institución, casi ninguna institución estadística del mundo anuncia datos del PBI mensuales sino que lo hace trimestralmente, y aun esos datos suelen estar sujetos a correcciones significativas en países como Estados Unidos y Europa (acá las correcciones nunca se anuncian y solo se incluyen asolapadamente en los datos oficiales varios años después). Los datos milagrosamente consiguen que el PBI de marzo haya salido positivo contra todos los pronósticos y el del primer trimestre pase, por centésimas, la mágica cifra del 2 por ciento, gracias al adelanto de la temporada de pesca respecto al año pasado, un efecto que solo cambia las cifras este mes. Pero son detalles. Las malas noticias del PBI están ahí, incontrastables, postergables por unas semanas, maquillables un poco, pero nada más. Sobre todo, a quien no pueden ocultarse es a los cien mil limeños que perdieron sus empleos.

Recordemos que poco después de elegido PPK; el Banco Central de Reserva sacó sus proyecciones: dijo que el PBI crecería este año 2017 en 4,6%, basado en un fuerte repinte de las exportaciones y la inversión pública y privada. La semana pasada, el MEF ya redujo sus proyecciones de crecimiento para este año a un optimista 3 por ciento, mientras que los analistas de la banca privada y las consultorías ya están pensando en un 2 por ciento. Claro que el gobierno insiste en que pasado este primer trimestre las cosas mejorarán después y que si este año estamos bajos el crecimiento regresará rápido en los siguientes años, aunque sin ningún fundamento para ello, al punto que el Consejo Fiscal, un organismo independiente del gobierno dirigido por Waldo Mendoza, ha señalado públicamente la ausencia de sustento a tales proyecciones.

INVERSIONES PÚBLICAS

La cuestión central es que la política económica adoptada no ha tenido resultados positivos. Recordemos el inicio del gobierno, cuando todas estas señales de una economía que había dejado de crecer y de empleos que se perdían ya estaba claramente establecidas, aunque todavía los titulares de la prensa concentrada nos engañaban con un crecimiento insostenible basado en la minería. Ya entonces se dijo, en estas páginas y por varios otros analistas, que la cifra de crecimiento del PBI 2016 estaba marcada por el inicio de operaciones del proyecto minero Las Bambas que no se repetiría, y que el fuerte crecimiento de años anteriores (2003-2011) se debía sobre

todo a que tuvimos mucha suerte con precios internacionales de minerales altos y flujos de capital moviéndose hacia los mercados emergentes.

Era necesario, como dijimos desde la izquierda, lanzar de inmediato un agresivo programa de inversiones públicas, bajar las tasas de interés, elevar los salarios mínimos y las pensiones y reforzar y mejorar la diversificación productiva. Pero lo que hizo el gobierno fue un recorte brutal del gasto público; en el cuarto trimestre del año pasado el gasto público no financiero fue 5 mil millones de soles menos que el 2015 en términos reales. Las leyes de financiamiento y el presupuesto que aprobó la mayoría fujimorista en el Congreso y la delegación de facultades en materia económica que dieron al gobierno fueron en la misma dirección: facilitar APPs y poner un tope rígido al déficit fiscal y la deuda para frenar la inversión pública y obligar a que la infraestructura se haga bajo el esquema “público-privado”. Las semanas siguientes salió a luz que lo de Chinchero era una trafaza de las amiguitas lobistas de PPK, las APPs eran un mecanismo privilegiado de robo de Odebrecht, AG y demás siglas, hasta que meses después se dieron cuenta que el destrabe era más complicado de lo que pensaban (Thorne dixit). La inversión se fue al piso, la demanda interna también y con ellas las posibilidades de retomar el crecimiento y el empleo.

De esta política económica son igualmente responsables el gobierno y el fujimorismo. La mayoría keikista del congreso aprobó las leyes, delegaciones de facultades y presupuesto para mantener la inversión pública restringida y favorecer a las APPs. El propio ministro Thorne refirió a la gran ayuda recibida por José Chlimper, el secretario general de Fuerza popular y director del Banco Central de Reserva con beneplácito del gobierno, en el trámite de estas leyes.

Pasados varios meses, desastres incluidos, la política fiscal sigue siendo insuficiente. Ahora ha tenido que retroceder y admitir que el déficit fiscal podría ser de 3% este año y 3,5% el próximo, pero para eso confía en dos políticas centrales. Por un lado, en que mejorará la recaudación fiscal, a pesar de que los datos muestran que en los primeros cuatro meses de este año el gobierno central ha tenido 1,300 millones de soles menos de recaudación, que los análisis de expertos como Luis Alberto Arias indican que sus medidas supuestamente dirigidas a la formalización de pymes han sido perjudiciales desde este punto de vista y que no han hecho nada para reducir las exoneraciones tributarias que regalan miles de millones a grandes empresas mineras, bancos, agroexportadores y negociantes con la educación superior. El gran problema es que, cuando los ingresos fiscales no aumenten, dada su rigidez frente al déficit fiscal, terminarán cortando la inversión y el gasto público, y ya están amenazando hacerlo en educación y salud a pesar de la espantosa falta de insumos y medicinas en los hospitales públicos. La última publicación del MEF dice que “Por el lado del gasto público, se continuará con la búsqueda de eficiencia, con mayor énfasis en el gasto corriente. De acuerdo a un estudio del FMI, en el Perú se podrían conseguir ahorros fiscales mayores al 1% del PBI si se mejora la eficiencia del gasto, especialmente en sectores como Educación, Salud”.

Si a esto sumamos un BCR fujimorizado que mantiene altas las tasas de interés y un tipo de cambio real que nos hace poco competitivos, unos salarios congelados y un retroceso total en materia de diversificación productiva, las perspectivas económicas no son buenas. Salvo que nos saquemos otra vez la lotería y la economía internacional venga al rescate.